

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RESOLUCIÓN No. **0429** **10 ABR 2018** DE 2018

*"Por la cual se impone una sanción a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, a través del expediente No. A-1465"*

LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 1 y 5 literal b) de la Ley 182 de 1995, en los artículos 6 literal j), 11, 21 y 22 de la Ley 1507 de 2012, el Acuerdo 010 de 2006, el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

1. HECHOS

Que la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, mediante contrato No. 075 del cuatro (04) de diciembre de 2012, otorgó concesión a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 - 3, para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción.

Que a la fecha la compañía aseguradora Seguros del Estado a través de la póliza de cumplimiento No. 21-44-101230778, es garante del contrato de concesión No. 075 del cuatro (04) de diciembre de 2012 suscrito entre el concesionario **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 - 3 y la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV.

Que en desarrollo de las actuaciones administrativas adelantadas por la ANTV en ejercicio de las facultades otorgadas en materia de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control del servicio público de televisión, se ordenó la realización de una visita de carácter administrativo al

prestatario del servicio público de televisión cerrada por suscripción **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 – 3, la cual se realizó el veintiuno (21) de abril de 2015, y cuyos hallazgos y conclusiones fueron registrados en el acta de visita No. 15042 de la misma fecha, los cuales se exponen a continuación:

"(...)

I. (...)

II. REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN

1. Producción propia y/o producción Nacional

1.1 ¿El operador cuenta con canal(es) de producción propia? No (se encuentra en montaje)

1.1.1 Nombre del Canal de producción propia: N.A.

1.1.2 Número del Canal de producción propia dentro de la parrilla de canales distribuida a los suscriptores: N.A.

1.2 Dentro de la parrilla de canales distribuida a los suscriptores, ¿El operador transmite canales temáticos satelitales?
SI

Si la respuesta al 1.2 fue "Sí", ¿cuántos canales temáticos satelitales transmite?

1

¿Cuáles?, indicando canal: Se evidencia, sobre la emisión en vivo de la mañana de hoy 21 de abril de 2015, solamente la transmisión del canal WIN, a pesar que el operador manifestó transmitir 10 canales temáticos satelitales.

| 1.3 | No. | Nombre | Cn/ | No. | Nombre | Cn/ |
|------------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|
| | 1 | WIN | 32 | 6 | ----- | |
| | 2 | ----- | | 7 | ----- | |
| | 3 | ----- | | 8 | ----- | |
| | 4 | ----- | | 9 | ----- | |
| | 5 | ----- | | 10 | ----- | |

2. Canales de interés para la comunidad y parrilla de canales

2.1 Dentro de la parrilla de canales distribuida a los suscriptores:
¿El operador distribuye el canal del congreso? Si

2.2 Parrilla completa de los canales distribuidos a los suscriptores:
Entrega el operador parrilla fechada 26 de enero de 2015, la cual informa que fue enviada a la ANTV. Se anexa a la presente Acta, folio 1.
Se realiza la verificación de parrilla con señal en vivo, encontrando que no se transmiten

| | |
|--|--|
| | los 10 canales satelitales temáticos que ha manifestado el operador que distribuye. |
| 2.3 | <p>De los canales distribuidos escogidos de la parrilla informada por el operador, se solicita suministrar copia de las autorizaciones, actualizadas a la fecha de visita, para retransmisión de los siguientes:</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> <p>_____Entregó/No entregó</p> <p>_____Entregó/No entregó</p> <p>_____Entregó/No entregó</p> <p>_____Entregó/No entregó</p> <p>_____Entregó/No entregó</p> |
| III. REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS - ADMINISTRATIVOS – BASES DE DATOS DE SUSCRIPTORES (TI) | |
| 3. Autoliquidación y bases de datos de suscriptores | |
| 3.1 | <p>Número de suscriptores reportados (o a reportar) por el operador en la autoliquidación que se debe presentar en el mes de visita, autoliquidación correspondiente al mes anterior a la visita:</p> <p><u>Respuesta:</u> 679 (folios 6-7)</p> |
| 3.2 | <p>Se solicita bajar del sistema y suministrar base de datos de suscriptores, a la fecha, en formato plano o Excel (que incluya nombre y apellido suscriptor, cédula, dirección, número de cuenta o de identificación del suscriptor para el operador, fecha de suscripción de contrato, estado de la suscripción)</p> <p><u>Respuesta:</u> No se obtiene respuesta.</p> |
| 3.3 | <p>Se solicita al operador indicar el número de suscriptores, con que cuenta a la fecha de la visita, partiendo de la base de datos suministrada:</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.4 | <p>Si existe diferencia entre los suscriptores reportados en la autoliquidación (3.1) y los informados según base de datos de suscriptores a la fecha de visita (3.3), favor explicar la razón de la diferencia:</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |

| | |
|-------------|---|
| 3.5 | <p>De una muestra de ____ suscriptores escogidos de la base de datos de suscriptores entregada (3.2), se solicita suministrar copia de los contratos suscritos.</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.6 | <p>Se solicita bajar del sistema y suministrar la base de datos de facturación, en formato plano o Excel, <u>actualizada a la fecha de la visita</u>, (que incluya número de factura, nombre y apellido suscriptor, cédula, dirección, número de cuenta o de identificación para el operador, período facturado, referencia de pago)</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.7 | <p>Se solicita al operador determinar, partiendo de la base de datos suministrada de facturación (3.6), el número de suscriptores con que cuenta <u>a la fecha de la visita</u>: ____ suscriptores</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.8 | <p>Se solicita al operador, entregar base de datos de la totalidad de facturas del servicio de televisión <u>emitidas en el mes inmediatamente anterior a la visita</u> (que incluya número de factura, nombre y apellido suscriptor, cédula, dirección, número de cuenta o de identificación para el operador, período facturado, referencia de pago)</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.9 | <p>Se solicita al operador determinar, partiendo de la base de datos suministrada de facturación (3.8), el número de suscriptores facturados <u>en el mes anterior</u> al mes en que se realiza la visita: ____ suscriptores</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.10 | <p>Si existe diferencia entre los suscriptores informados según base de datos de facturación, <u>en el mes anterior a la visita</u> (3.9), y los reportados en la autoliquidación (3.1), favor explicar la(s) razón(ones) de la diferencia:</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.11 | <p>Si existe diferencia entre los suscriptores informados según base de datos de facturación <u>a la fecha de visita</u> (3.7) y los suscriptores con que cuenta <u>en la fecha de la visita</u> según informa el operador (3.3), favor explicar la(s) razón(ones) de la diferencia:</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |
| 3.12 | <p>De una muestra de ____ suscriptores escogidos de la base de datos de facturación entregada (3.6 ó en su defecto 3.8), se solicita suministrar copia de los contratos suscritos.</p> <p><u>Respuesta:</u> no se desarrolló por las razones explicadas en el numeral V. (OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA).</p> |

IV. (...)**V. OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN(ES) REALIZA(N) LA VISITA:**

El desarrollo de la visita se vio afectado de manera negativa inicialmente debido a la ausencia del representante legal; quien atiende inicialmente la visita es la señora Olga Lucía Amaya quien se identifica como integrante del equipo de recursos humanos del operador y manifiesta que no tiene conocimiento sobre los puntos que se indagarán en la visita, aclarando que tiene conocimiento de autoliquidaciones, que es ella quien las prepara. Se inicia la visita preguntando sobre el punto II del acta (REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN), a lo cual la señora Amaya reitera desconocer la información solicitada.

Siendo las 9:30 de la mañana arriba a las instalaciones del operador el señor Luis Onofre Redondo, representante legal del concesionario, quien inicialmente explica la estructura de red para llegar a los suscriptores en los distintos municipios donde presta servicio el operador. A partir de que finaliza su explicación, se logra reiniciar con los puntos planeados para la actividad de visita y se desarrolla el segundo punto de esta (sic), concretamente hasta el numeral 2.2. Al respecto cabe mencionar que el señor representante legal manifestó inicialmente contar con varias cabeceras indicó que cada cabecera distribuía su parrilla particular. Al solicitar la información de parrilla al personal de su equipo, le es suministrado un solo folio de parrilla. El señor Redondo modifica su información y suministró como parrilla, el listado al que se ha hecho referencia, identificado como folio número 1. Lo anterior toma un tiempo largo en ser respondido.

De nuevo se ve afectado el desarrollo de la visita planeada, presentándose dilación debido a que el señor representante legal se retira para atender una reunión por lo que por un lapso de aproximadamente media hora, no se dispone de persona alguna para la atención de la visita.

Sobre las parrillas de canales solicitadas de las distintas cabeceras, finalmente presentó el operador GLOBALNET COLOMBIA S.A., una única parrilla, fechada 26 de enero de 2015, modificando su respuesta previa en el sentido de que contaba con una parrilla para cada cabecera, manifestando que solo distribuye la parrilla que presenta e informando que fue la enviada como certificación trimestral de parrilla a la ANTV en enero de 2015 (folio 1). En dicha parrilla no se evidencia la existencia de los 10 canales satelitales temáticos que informa el día de hoy que distribuye. Presenta así mismo, oficio respuesta de fecha 24 de marzo de 2014 dirigido al Consorcio Interventoría Concesión TV, certificando canales temáticos y contratos, adjuntando un listado de 10 canales temáticos satelitales (folios 2 y 3). No obstante lo anterior, se realiza verificación de la parrilla con señal en vivo y se evidencia que el único canal temático satelital que se encuentra distribuyendo el operador el día de hoy martes 21 de abril de 2015 es el canal WIN. Los canales Mi Gente (48) y Cantinazo (50), aun cuando se encuentran en el listado, no se evidencian al aire. Se informa de este hecho al representante legal, quien manifiesta que hay moduladores de algunos canales dañados, pero no informa cuáles ni a qué canales corresponden. De esta forma se evidencia que el operador no se encuentra transmitiendo los 10 canales temáticos satelitales que verbalmente informó que distribuye.

Se solicita avanzar de nuevo en los puntos subsiguientes planeados de la visita, procediendo a solicitar información del numeral III. Entrega el operador copia de email de envío de la autoliquidación del mes de marzo de 2015 a la ANTV, del formato de autoliquidación enviado, del listado desagregado de suscriptores por municipio y de la consignación realizada (folios 4-8).

Se procede a indagar sobre el proceso de venta en los municipios, a lo cual el representante legal brinda información que no se le ha solicitado y de nuevo dilata la respuesta sobre lo que se indaga. Finalmente informa que cuentan una camioneta que va recorriendo los municipios realizando la gestión comercial. Al indagar sobre copias de contratos físicos, informa que se encuentran en oficinas en los municipios, a lo cual se le contrasta la respuesta con lo que manifestó respecto a la gestión comercial e indica que en algunos municipios cuentan con oficinas. Confirma que no cuenta con copia de contratos en Bogotá.

Se le solicita al representante legal, acceso a la base de datos, de lo cual toma nota indicando que el acceso a dicho sistema se encuentra tercerizado. Realiza una llamada al respecto, pero no da respuesta a la solicitud, retirándose del salón.

Siendo las 11:45am (sic), regresa al salón donde se atiende la visita, el señor representante legal, con el señor abogado Andrés Martínez sobre quien el representante legal del operador informa que será quien continuará atendiendo la visita ya que debe retirarse de las instalaciones del concesionario. Se retiran del lugar donde se atiende la visita y proceden a redactar un poder general amplio y suficiente para que continúe la atención de la visita. Regresan al salón y entregan el poder y se solicita que este sea presentado debidamente autenticado en notaría. Nuevamente se retiran y pasa más de hora y veinte minutos en que no se atiende la visita. Siendo la 1:12pm (sic), en la recepción del concesionario, se solicita la presencia de la señora Amaya, quien se encuentra en las instalaciones y al hacerse presente se le informa que dada la situación de dilación en atención de la visita, situación que se ha percibido desde el inicio de la misma, se da esta por terminada. La señora Amaya se comunica con el representante legal e informa que no firmará el acta.

En resumen el operador no ha colaborado de manera efectiva con el desarrollo de la visita, al dar respuestas poco claras y distractoras, al ausentarse repetidamente de la reunión de atención a la visita y al no brindar la totalidad de la información solicitada, correspondiente a: parrillas de canales de sus diferentes cabeceras, bases de datos de suscriptores, copias de contratos de suscripción.

(...)”.

Que mediante informe No. 15042 de abril de 2015, se presentó el análisis de la visita realizada a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 – 3, cuyos hallazgos y conclusiones más relevantes se exponen a continuación:

"(...)

1. *(...)*

2. (...)**3. Hallazgos**

En planeación de la visita, se estableció que la misma se enfocaría en los siguientes aspectos:

- 1. Programación; producción propia y parrilla de canales*
- 2. Financieros, administrativos y bases de datos*

Se describen a continuación los hallazgos evidenciados en la visita realizada:

3.1 Informa el concesionario que no cuenta con canal de producción propia. En relación con lo anterior, el concesionario suministra una parrilla de canales en la cual no se evidencian los 10 canales temáticos satelitales que informó, verbalmente en la visita, que transmite. Al verificar la parrilla con la transmisión en vivo, se confirma que efectivamente el operador no transmite los 10 canales temáticos satelitales que informó, encontrando únicamente el canal WIN. Cabe agregar que el operador suministró una comunicación de fecha 24 de marzo de 2015, dirigida al Consorcio Interventoría Concesión TV en la cual informa que envía, entre otros, como primer punto, certificación de canales temáticos; así mismo entregó un folio, que informó que adjuntó a dicha comunicación, con un cuadro titulado "CANALES TEMÁTICOS COLOMBIANOS GRILLA DE CANALES DE GLOBALNET COLOMBIA S.A." en el cual se listan 10 canales temáticos satelitales.

3.2 Para la revisión de información de los aspectos financieros, administrativos y de bases de datos, se solicita inicialmente al concesionario suministrar información de las bases de datos de suscriptores y permitir el acceso a esta en el sistema del operador. El concesionario no permite el acceso al sistema del operador ni hace entrega de la información solicitada, manifestando que su información de suscriptores la maneja un proveedor externo. Como resultado de esta situación, no se habilita acceso alguno a ningún sistema de información, impidiendo de esta forma el desarrollo de la mayoría de los puntos que se revisarían en la visita, en especial bajo el numeral III del plan de esta, según se plasma en el acta de visita adjunta al presente informe.

4. Observaciones y recomendaciones

*A partir de los aspectos revisados y los hallazgos evidenciados en la visita realizada al operador **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, se presentan a continuación las observaciones y recomendaciones pertinentes:*

4.1 El operador no atendió en debida forma la visita, al brindar respuestas que no respondía a lo que se preguntaba, desviando el objetivo de la visita y ausentándose repetidamente de la reunión de visita dilatando la misma (sic).

4.2 De acuerdo con los hallazgos descritos en la sección anterior, se pone a disposición de la Coordinación de Vigilancia, Control y Seguimiento, el presente informe, el acta de visita 15042 y todos sus anexos, para que se adelanten las actuaciones administrativas a que haya lugar.

4.3 A partir de la observación del numeral 4.2., se recomienda a la Coordinación de Vigilancia, Control y Seguimiento, que se adelanten las actuaciones administrativas que considere pertinentes y adjuntar el presente informe junto con todos sus anexos al expediente que se dé apertura.

(...)”.

Que tomando como fundamento los hallazgos registrados en el acta No. 15042 del veintiuno (21) de abril de 2015 y el informe de visita No. 15042 de abril de 2015, en relación con la operación del servicio de televisión por parte de la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV expidió la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, a través de la cual ordenó iniciar procedimiento administrativo sancionatorio y formuló cargos al operador descrito por el presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 010 de 2006, en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012; y el artículo 39 del Acuerdo No. 010 de 2006.

Que a través de la comunicación identificada con número de salida 201700000407 del doce (12) de enero de 2016, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, citó a la comunidad organizada investigada para la diligencia de notificación personal de la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, comunicación entregada el doce (12) de enero de 2017, como consta en sello de recibido de la empresa investigada.

Que vencido el término de los cinco (05) días al cabo del recibido del citatorio para que el interesado compareciera a la diligencia de notificación personal, se procedió conforme a lo establecido en el artículo 69 ibidem y se envió la notificación por aviso acompañada de copia íntegra de la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, mediante radicado No. 201700004098 del seis (06) de marzo de 2017, la cual fue entregada el ocho (08) de marzo de 2017, como consta en sello de recibido de la empresa investigada.

Que se comunicó la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, a la empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A., mediante radicado 201700021840 del veintiocho (28) de septiembre de 2017, la cual fue entregada el dos (02) de octubre de 2017, por la empresa de envíos 4-72.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la comunidad organizada objeto de investigación contaba con un término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, para presentar descargos, solicitar y aportar pruebas, controvertir y/o contradecir las que obran en el expediente.

Que el operador objeto de investigación haciendo uso de su derecho de defensa y contradicción, radicó dentro del término legal a través de la comunicación identificada con el número 201700010042 del veintiocho (28) de marzo de 2017, escrito de descargos contra la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016.

Que a través de la Resolución No. 2243 del veintinueve (29) de diciembre de 2017, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV resolvió dar traslado al operador objeto de investigación para la presentación de los respectivos alegatos de conclusión.

Que a través de la comunicación identificada con radiado S2018800000356 del cuatro (04) de enero de 2018, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, citó a la comunidad organizada investigada para la diligencia de notificación personal de la Resolución No. 2243 del veintinueve (29) de diciembre 2017, comunicación entregada el cinco (05) de enero de 2017, como consta en sello de recibido de la empresa investigada.

Que en igual forma, la Resolución No. 2243 del veintinueve (29) de diciembre 2017, fue enviada al correo electrónico reportado en cámara de comercio: soporteglobalnetcol@gmail.com, la cual fue entregada el cinco (05) de enero de 2018 conforme a certificado E6431103-S expedido por la empresa de envíos 4-72.

Que el quince (15) de enero de 2018, fue notificada la Resolución No. 2243 del veintinueve (29) de diciembre 2017, a la señora Diana Carolina Méndez en calidad de apoderada de la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**

Que se comunicó la Resolución No. 2243 del veintinueve (29) de diciembre 2017, a la empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A., mediante radicado S2018800000369 del cuatro (04) de enero de 2018, la cual fue entregada el nueve (09) de enero de 2018, por la empresa de envíos 4-72, como consta en sello de recibido de la empresa aseguradora.

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, la sociedad investigada contaba con un término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución No. 2243 del veintinueve (29) de diciembre 2017, para presentar alegatos de conclusión, dentro del procedimiento sancionatorio adelantado a través del expediente No. A-1465.

Que establecido lo anterior la sociedad investigada presentó alegatos de conclusión dentro del término legal, bajo el radicado E2018900002567 del veintinueve (29) enero de 2017, frente a los cuales esta autoridad se pronunciara en acápite posterior.

Que consultado el nueve (09) de febrero de 2018, el certificado de existencia y representación legal en el registro único empresarial y social de la cámara de comercio RUES correspondiente a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 – 3, se encuentran las siguientes anotaciones:

"(...)

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 7 DE JULIO DE 2096

(...)"

2. PERSONA JURÍDICA OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

La sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 - 3, operador del servicio de televisión por suscripción de acuerdo con el contrato No. 075 del cuatro (04) de diciembre de 2012, es sujeto de las obligaciones constitucionales, legales, reglamentarias y regulatorias previstas para la prestación de dicho servicio.

3. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL TELEVISIÓN

El artículo 11 de la Ley 1507 de 2012 establece de manera expresa la transferencia a la ANTV de las funciones de control y vigilancia antes asignadas por la Ley 182 de 1995 a la extinta CNTV, entre ellas las previstas en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, que establece:

"(...)

b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar.

(...)"

Al tiempo que el literal j) del artículo 6 de la Ley 1507 de 2012, dispone que es función de la Junta Nacional de Televisión:

"(...)

j) Sancionar de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias o de las de la ANTV, relacionadas con el servicio.

(...)"

En este orden de ideas es claro que la ANTV es competente para adelantar las investigaciones que se deriven de las funciones que le asigna la ley en materia de Vigilancia, Inspección, Control y Seguimiento del servicio público de televisión, así como para imponer las sanciones a que haya lugar.

Teniendo en cuenta que no existe norma especial que regule el procedimiento a seguir por parte de la ANTV para efectos de ejercer las facultades de inspección, control y vigilancia, y por ende el poder sancionatorio, debe darse aplicación al procedimiento general señalado para tal efecto en

el Capítulo III del Título III de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4. PRUEBAS

La Autoridad Nacional de Televisión - ANTV para decidir de fondo la actuación administrativa adelantada dentro del expediente A-1465, valoró y consideró todas las pruebas que obran en el expediente, en especial las que se mencionan a continuación:

- Contrato No. 075 del cuatro (04) de diciembre de 2012, por medio del cual la extinta omisión Nacional de Televisión otorgó concesión a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 - 3, para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción.
- Acta de visita No. 15042 del veintiuno (21) de abril de 2015, mediante la cual se verificó la prestación del servicio de televisión por suscripción a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**
- Informe No. 15042 de abril de 2015, por el cual se analizaron las conclusiones y los hallazgos evidenciados en la diligencia realizada el veintiuno (21) de abril de 2015, a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, junto con sus anexos.

5. CARGOS FORMULADOS.

Que los cargos formulados a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, mediante Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, se expresaron en los siguientes términos:

"(...)

- **PRIMER CARGO**

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo No. 010 de 2006 en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción están obligados a atender los requerimientos de información que le formulara la ANTV en ejercicio de su función de Inspección, Vigilancia y Control, atribución que esta Autoridad estaba cumpliendo precisamente con el desarrollo de la visita realizada el día veintiuno (21) de abril de 2015; sin embargo, de acuerdo con los hallazgos y conclusiones registrados en el Acta de visita No. 15042 de la misma fecha y el informe de visita No. 15042 de fecha abril de 2015, presuntamente el operador **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, no habría atendido la totalidad de los requerimientos de información que le fueron formulados en el marco de la visita de señalada, tal situación se deriva de la siguiente conclusión:*

"(...)

- 4.1. *El operador no atendió en debida forma la visita, al brindar respuestas que no respondía a lo que se preguntaba, desviando el objetivo de la visita y ausentándose repetidamente de la reunión de visita dilatando la misa.*

(...)”

La anterior conducta podría constituir una presunta infracción a lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo No. 010 de 2006, en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012.

• **SEGUNDO CARGO:**

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 010 de 2006, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción independientemente de la tecnología utilizada en la retransmisión de la señal, se encuentran obligados a retransmitir a sus suscriptores un canal de producción propia el cual deberá emitir como mínimo cinco (5) horas diarias de producción nacional, dicho deber legal se exonero a través del artículo 4 del Acuerdo No. 001 de 2009, si dentro de la parrilla de programación del cable operador cuenta en todos los municipios donde tengan cobertura, un mínimo de diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional, sin embargo, de acuerdo con los hallazgos y conclusiones registrados en el Acta de visita No. 15042 realizada el día veintiuno (21) de abril de 2015 y el informe de visita No. 15042 de fecha abril de 2015, presuntamente el operador del servicio de televisión por suscripción **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, no cuenta con un canal de producción propia, ni tampoco incluye en la parrilla de programación de la ciudad de Bogotá D.C., los diez (10) canales temáticos satelitales de origen nacional de que trata la norma reglamentaria. Tal situación se deriva de la siguiente conclusión:*

“(...)”

Informa el concesionario que no cuenta con canal de producción propia. En relación con lo anterior, el concesionario suministra una parrilla de canales en la cual no se evidencian los 10 canales temáticos satelitales que informó, verbalmente en la visita, que transmite. Al verificar la parrilla con la trasmisión en vivo, se confirma que efectivamente el operador no transmite los 10 canales temáticos satelitales que informó, encontrando únicamente el canal WIN. (...)”

(...)”

La anterior conducta podría constituir una presunta infracción a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 010 de 2006, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012.

(...)”

6. NORMAS INFRINGIDAS.

Con las conductas arriba descritas, la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, presuntamente transgrediría las siguientes normas:

Artículo 11 de la Ley 1507 de 2012

"(...)

ARTÍCULO 11. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y VIGILANCIA. La Asignada a la Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercerá las funciones que el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión, sin perjuicio de las actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que en calidad de entidad concedente debe realizar la ANTV, de conformidad con el 14 de la presente ley, y de aquellas relacionadas con el control y vigilancia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de televisión de acuerdo con el artículo 15 de la presente ley.

PARÁGRAFO. Corresponde a la ANTV ejercer el control y vigilancia por el cumplimiento de normas relacionadas con los contenidos de televisión.

Ley 182 de 1995, literal b) artículo 5

"(...)

b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigación; exigirles y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y características de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar.

(...)".

Acuerdo No. 010 de 2006

"(...)

ARTÍCULO 12. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL.

Con el objeto de fomentar la industria de televisión colombiana, el concesionario deberá emitir como mínimo un canal con cinco (5) horas diarias de producción nacional.

Parágrafo 1. La Comisión Nacional de Televisión previo análisis y evaluación del desarrollo de la industria de la televisión por suscripción, podrá aumentar de manera gradual la exigencia de producción nacional.

Parágrafo 2. Los operadores del servicio de televisión por suscripción deberán conservar al menos por seis (6) meses, las grabaciones de los programas de producción propia que emitan.

(...)

ARTÍCULO 39. VIGILANCIA Y CONTROL. De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, la Comisión Nacional de Televisión efectuará visitas de inspección a cada uno de los prestatarios del servicio de televisión por suscripción y verificará el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

PARÁGRAFO. En todo caso, la Comisión Nacional de Televisión podrá contratar con entidades públicas nacionales o internacionales, las actividades que considere necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones de control y vigilancia.

(...)"

7. CONSIDERACIONES DE LA ANTV.

Procede la ANTV en el presente acápite a desarrollar de manera detallada los hechos generadores de la conducta investigada, a la luz de lo señalado en el escrito de descargos presentado con radicado No. 201700010042 del veintiocho (28) de marzo de 2017 y en el escrito de alegatos de conclusión presentado con radicado No. E2018900002567 del veintinueve (29) de enero de 2018, así como también frente al acervo probatorio que obra en el expediente objeto de análisis.

Debido a la coincidencia de los argumentos planteados tanto en el escrito de descargos como en el escrito de alegatos de conclusión presentado por la sociedad investigada, procederá esta Autoridad a pronunciarse en un mismo sentido.

Previo al pronunciamiento de los argumentos esgrimidos por el operador investigado tanto en el escrito formulado frente a la resolución que dio apertura al procedimiento administrativo sancionatorio, como en el escrito de alegatos de conclusión, la ANTV transcribirá los apartes pertinentes de los escritos en mención.

EN CUANTO AL PRIMER CARGO:

Previo a pronunciarnos sobre este cargo es importante recordar al operador que si bien es cierto está Autoridad mediante la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, expedida por la Autoridad Nacional de Televisión, derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006, norma sobre la cual esta Autoridad se pronunciara más adelante, no es menos cierto, que el cargo primero formulado mediante la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, se sustenta en normas de orden jurídico que contiene un nivel jerárquico superior como lo son la Ley 182 de 1995 y la Ley 1507 de 2012, esto implica, a su vez, que aquellas normas que hacen parte del bloque de legalidad en sentido estricto, alcancen el mismo nivel jerárquico de la Ley, por lo que son disposiciones integradas a esta, lo que implica que en

todo caso debe preferirse la vigencia sustantiva de la Ley cuando entre en contradicción con el contenido de una norma jurídica de inferior jerarquía.

Respecto al tema señala la sentencia de la Corte Constitucional C-054/16 del Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, lo siguiente:

"(...)

Esto significa que las referidas fórmulas de interpretación serán conformes con la Carta Política en cuanto garanticen la eficacia de las facetas jerárquica, directiva e integradora del principio de supremacía constitucional. En otras palabras, la utilización de los métodos tradicionales de interpretación en casos concretos será admisible a condición que los resultados hermenéuticos sean compatibles con las restricciones formales y materiales de validez que impone la Constitución. En consecuencia, el intérprete deberá desechar aquellas opciones interpretativas que contradigan la Carta, incluso cuando las mismas sean un ejercicio razonable de las fórmulas de interpretación mencionadas. En contrario, cuando el uso de dichos mecanismos tradicionales no implique dicha incompatibilidad, sus resultados serán compatibles con el orden constitucional. (subrayado y en negrilla fuera de texto)

(...)”

Expresado lo anterior, recordemos el primer cargo formulado mediante la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016:

"(...)

• **PRIMER CARGO**

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo No. 010 de 2006 en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción están obligados a atender los requerimientos de información que le formulara la ANTV en ejercicio de su función de Inspección, Vigilancia y Control, atribución que esta Autoridad estaba cumpliendo precisamente con el desarrollo de la visita realizada el día veintiuno (21) de abril de 2015; sin embargo, de acuerdo con los hallazgos y conclusiones registrados en el Acta de visita No. 15042 de la misma fecha y el informe de visita No. 15042 de fecha abril de 2015, presuntamente el operador **GLOBALNET COLOMBIA S.A.** no habría atendido la totalidad de los requerimientos de información que le fueron formulados en el marco de la visita de señalada, tal situación se deriva de la siguiente conclusión:*

"(...)

- 4.2. *El operador no atendió en debida forma la visita, al brindar respuestas que no respondía a lo que se preguntaba, desviando el objetivo de la visita y ausentándose repetidamente de la reunión de visita dilatando la misma.*

(...)”

La anterior conducta podría constituir una presunta infracción a lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo No. 010 de 2006, en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 6º de la Ley 1507 de 2012.

Se pronuncia sobre aquel el actor en el documento de descargos, así como en el de alegatos de conclusión de la misma manera:

“(…)”

(i) . Descargos

PRIMER CARGO.

De acuerdo con los hallazgos y conclusiones registrados el acta de visita No. 15042 realizada el día 21 de abril de 2015 y el informe de visita No. 15042 de fecha abril de 2015, presuntamente el operador GLOBALNET COLOMBIA S.A., no habría atendido la totalidad de los requerimientos de información que le fueron formulados en el marco de la visita señalada.

RESPUESTA AL PRIMER CARGO

Ante los hechos descritos en la Resolución, a continuación, hacemos las siguientes precisiones:

- 1. En el punto II del numeral Tercero, de la Resolución 2428 de 2016, es evidente que por parte de GLOBALNET COLOMBIA S.A., queda evidencia que se atendió cada una de las preguntas realizadas por la Autoridad como consta en cada una de las respuesta (sic) desde el numeral 1 al 2.2.*
- 2. Frente a lo preguntado en numeral 2.3., “De los canales distribuidos escogidos de la parrilla informada por el operador, se solicita suministrar copia de las autorizaciones, actualizadas a la fecha de visita, para retransmisión de los siguientes:”, es evidente que quien atendió la visita, la señora Olga Lucía Amaya, no se encontraba en capacidad de entregar copia de las autorizaciones de los canales solicitados.*

De lo anterior, se encuentra evidencia en el punto V “OBSERVACIONES DE QUIÉN REALIZA LA VISITA” del numeral Tercero de la Resolución 2428 de 2016, el cual transcribimos a continuación:

*“El desarrollo de la visita se vio afectado de manera negativa inicialmente debido a la ausencia del representante legal; quien atiende inicialmente la visita es la señora Olga Lucía Amaya quien se identifica como integrante del equipo de recursos humanos del operador y **manifiesta que no tiene conocimiento sobre los puntos que se indagarán en la visita, aclarando que tiene conocimiento de autoliquidaciones**, que es ella quien las*

prepara. Se inicia la visita preguntando sobre el punto II del acta (REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN), a lo cual la señora Amaya reitera desconocer la información solicitada. (...)" (negrilla fuera de texto).

3. *Frente a las no respuestas indicadas en los numerales 3.2. al 3.12 del numeral tercero de la Resolución 2428 de 2016, vale decir que en el numeral V "OBSERVACIONES DE QUIÉN REALIZA LA VISITA" de la citada Resolución, es evidente que por parte de GLOBALNET COLOMBIA S.A., hubo una clara muestra de colaboración en la atención de la visita tal como quedó demostrado con el levantamiento del acta de visita No. 15042 del 21 de abril de 2015.*

La no entrega de la información, no se debió a una renuencia por parte de GLOBALNET COLOMBIA S.A., sino que como quedó transcrito en la Resolución 2428 de 2016, la base de datos solicitada, es un servicio que se encuentra tercerizado, razón por la cual al momento que la Autoridad realizó la solicitud, era necesario comunicarse con el proveedor del servicio y verificar la posibilidad de hacer la entrega de forma inmediata o establecer el tiempo para esto.

Lamentablemente, como igualmente quedó transcrito en la Resolución 2428 de 2016, la persona encargada de hacer la visita administrativa decidió terminar la reunión y no esperar más la información solicitada.

Lo anterior, es clara evidencia que GLOBALNET COLOMBIA S.A., no ha impedido la visita adelantada por la Autoridad Nacional de Televisión, ni ha hecho oponible la reserva o inviolabilidad de los documentos solicitados en desarrollo de la visita administrativa No. 15042 realizada el día 21 de abril de 2015.

(...)"

Se fundamenta el operador investigado en señalar que la información solicitada por la ANTV en transcurso de la visita administrativa no pudo ser suministrada debido a: i) la persona que atendió la visita no era la indicada para atender la visita administrativa, ii) sus bases de datos son tercerizadas por lo cual no contaban con la información, iii) la ANTV no esperó la información solicitada.

Respecto a lo anterior, cabe indicar al operador que si bien este alega que la señora Olga Lucía Amaya, no era la indicada para atender la visita, no es menos cierto que el representante legal de la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, el señor Luis Onofre Redondo así como su apoderado el abogado Andrés Martínez, se encontraban en el lugar, como quedo consignado en el acta No. 15042 de 2015, estando ellos en la obligación de suministrar la información solicitada de manera clara, contando con la documentación requerida ya que esta hace parte del transcurrir ordinario de su gestión y atendiendo con la mayor diligencia la visita de verificación de su operación, encabezada por esta Autoridad.

Recordemos al actor lo referido a este punto, descrito en el acta de visita No. 15042 del veintiuno (21) de abril de 2015, mediante la cual se verificó la prestación del servicio de televisión por

suscripción a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, la cual es parte fundamental de este proceso:

"(...)

En resumen el operador no ha colaborado de manera efectiva con el desarrollo de la visita, al dar respuestas poco claras y distractoras, al ausentarse repetidamente de la reunión de atención a la visita y al no brindar la totalidad de la información solicitada, correspondiente a: parrillas de canales de sus diferentes cabeceras, bases de datos de suscriptores, copias de contratos de suscripción."

(...)"

En suma alegar por el operador su imposibilidad para entregar información con la que debe contar en el transcurrir ordinario de su negocio o señalar que la persona que inicialmente atendió la visita no era la indicada por no contar con la información, no guarda relación con el hecho de que el representante legal se encontraba en el lugar y que tampoco suministrara la información solicitada por esta autoridad, impidiendo el objeto de vigilar, controlar y seguir su operación, transgrediendo con su actuar las normas legales y reglamentarias citadas.

Por su parte frente al argumento, el cual revierte la carga de su descuido en esta Autoridad al argumentar que esta fue la que no espero a que se le entregara la información solicitada, es de aclarar que esta Autoridad no se encuentra en la obligación de esperar por una información indefinidamente en el tiempo, más aún cuando es una información con la que el licenciataria debe contar en el transcurrir ordinario de su negocio, no obstante se verifica mediante acta de visita No. 15042 de 2015, que se le brindo al operador investigado un término prudencial de respuesta, sin que este la aportara.

Al respecto es importante señalar que las visitas efectuadas por la ANTV a los diferentes operadores del servicio de televisión constituyen actividades continuas que realiza la ANTV en el marco de sus funciones, las cuales tienen por objeto verificar las condiciones de operación del servicio de televisión por parte de los concesionarios y licenciataria que cuentan con título habilitante.

Adicional a las razones expuestas, no son de recibo los argumentos expuestos por la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, por cuanto estos no van encaminados a demostrar que la sociedad investigada cumplió con lo solicitado en la visita administrativa llevada a cabo el veintiuno (21) de abril de 2015, por el contrario, el operador acepta de manera expresa que efectivamente no se suministró la información requerida por esta Autoridad al señalar que *"La no entrega de la información, no se debió a una renuencia por parte de GLOBALNET COLOMBIA S.A.(...)"*

En este orden de ideas, es del caso tener en cuenta que la sociedad investigada con su actuar omisivo, impidió que la ANTV, desplegara su función de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control, y que este por mandato legal se encuentra obligado a dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos efectuados por el regulador y revisados los descargos y los

alegatos de conclusión aportados por la sociedad investigada, encuentra la ANTV que los mismos no controvierten los hechos investigados por los cuales se le formuló el primer cargo en la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, y que por el contrario son corroborados a partir de la aceptación de no responder de manera oportuna al requerimiento efectuado por el regulador. Adicionalmente encuentra esta entidad que el operador investigado no solicitó expresamente en curso de la visita o solicitó que se plasmara en el acta de visita su interés en que se le extendiera un plazo para entregar posteriormente la información y documentación requerida.

En concordancia con las consideraciones precedentes y de un análisis objetivo frente a los hechos, pruebas y documentos obrantes en el sub lite, concluye la ANTV, que la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, no desvirtuó el cargo primero que le fuera formulado mediante la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, y por lo que se debe proceder con la imposición de la sanción que por tal efecto corresponda.

Continúa la ANTV con el análisis correspondiente:

EN CUANTO AL SEGUNDO CARGO:

Recordemos el segundo cargo formulado mediante la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016:

"(...)

• **SEGUNDO CARGO:**

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 010 de 2006, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción independientemente de la tecnología utilizada en la retransmisión de la señal, se encuentran obligados a retransmitir a sus suscriptores un canal de producción propia el cual deberá emitir como mínimo cinco (5) horas diarias de producción nacional, dicho deber legal se exonero a través del artículo 4 del Acuerdo No. 001 de 2009, si dentro de la parrilla de programación del cable operador cuenta en todos los municipios donde tengan cobertura, un mínimo de diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional, sin embargo, de acuerdo con los hallazgos y conclusiones registrados en el Acta de visita No. 15042 realizada el día veintiuno (21) de abril de 2015 y el informe de visita No. 15042 de fecha abril de 2015, presuntamente el operador del servicio de televisión por suscripción **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, no cuenta con un canal de producción propia, ni tampoco incluye en la parrilla de programación de la ciudad de Bogotá D.C., los diez (10) canales temáticos satelitales de origen nacional de que trata la norma reglamentaria. Tal situación se deriva de la siguiente conclusión:*

"(...)

Informa el concesionario que no cuenta con canal de producción propia. En relación con lo anterior, el concesionario suministra una parrilla de canales en la cual no se evidencian los 10 canales temáticos satelitales que informó, verbalmente en la visita, que transmite. Al verificar la

parrilla con la transmisión en vivo, se confirma que efectivamente el operador no transmite los 10 canales temáticos satelitales que informó, encontrando únicamente el canal WIN. (...)"

(...)"

La anterior conducta podría constituir una presunta infracción a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 010 de 2006, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012.

(...)"

Previo a resolver en derecho lo procedente dentro de la presente actuación administrativa, esta Autoridad estima pertinente señalar que mediante la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, expedida por la Autoridad Nacional de televisión, se derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006, norma que contenía las disposiciones por cuya presunta infracción se formuló el cargo segundo del numeral quinto contenido en la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016.

En ese sentido, merece la pena mencionar que la Dirección de la ANTV solicitó un concepto jurídico al abogado externo doctor OSCAR IBAÑEZ IBARRA sobre *"La aplicación de la favorabilidad en actuaciones administrativas, con ocasión de la derogatoria de las disposiciones que sustentaron la apertura (...) y formulación de cargos."*, el cual fue emitido el veintisiete (27) de marzo de 2017, y revisado por el Comité de Conciliación de la ANTV en su sesión No. 93 del tres (03) de mayo de 2017, de conformidad con lo solicitado por la Dirección mediante Memorando No. I-04-1512 EC- T2017/ 007118 del diecinueve (19) de abril de 2017 y por la Coordinación de Vigilancia, Control y Seguimiento, mediante Memorando No. I-04-1528 T2017/ 007177 del veinte (20) de abril de 2017.

De acuerdo con lo anterior, con el objeto de fortalecer los argumentos jurídicos para decidir la actuación administrativa sancionatoria que adelanta la entidad, se procede a citar el referido concepto:

"(...)

1. Antecedentes

De acuerdo con el contenido de su mensaje de texto, los aspectos de hecho y de derecho a considerar dentro del presente análisis, son los siguientes:

"En ejercicio de las facultades señaladas en la ley, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, realizó la verificación del cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del anexo técnico del Acuerdo 010 de 2006, el cual señala:

(...)

En atención a que un número importante de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción no presentaron oportunamente el reporte anual de información de carácter técnico para el año 2014, de conformidad con lo estipulado en el numeral 6 del anexo técnico del Acuerdo No. 010 de 2006, se abrieron varias actuaciones administrativas sancionatorias y se formularon cargos por este presunto incumplimiento.

Posteriormente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió la Resolución No. 4735 del 15 de mayo de 2016, **en la cual se deroga parcialmente el numeral 6 del Anexo Técnico del Acuerdo 10 de 2006 que contiene la obligación por la que se abrieron las actuaciones administrativas señaladas.**

Ante la circunstancia de la derogatoria de la obligación cuyo incumplimiento generó las investigaciones, **la Junta Nacional de Televisión solicitó a la Dirección la revisión de la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad** en estas investigaciones, considerando que en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones MINTIC se viene aplicando el principio de favorabilidad en materia administrativa sancionatoria para casos similares.

En cumplimiento de tal solicitud **la Coordinación legal de la ANTV emitió un concepto jurídico al respecto**; sin embargo, la Junta solicitó una nueva revisión de la posición de la entidad, ya que el MINTIC que es la máxima instancia en el sector al que pertenece la ANTV y fija las políticas que rigen el sector tiene la tesis contraria a la adoptada por la Coordinación Legal de la ANTV en su concepto."

2. Consideraciones:

Ciertamente, tal como se afirma en su mensaje de datos, el concepto emitido por la Coordinación Legal de la ANTV, a folio 5 afirma lo siguiente:

"Conviene precisar que la consagración constitucional del principio de favorabilidad solo se circumscribe a la jurisdicción penal (...)"

Posteriormente, a folio 6 sostuvo que:

"Dentro de las garantías del debido proceso en materia administrativa sancionatoria el CPACA no contempló la aplicación del principio de favorabilidad, sin embargo, ello no quiere decir que por vía de una norma especial pueda consagrarse."

De suerte que no cabe duda que, para la Coordinación Legal de la ANTV, la aplicación del principio de favorabilidad, no tiene cabida en los procesos administrativos sancionatorios adelantados por la ANTV con ocasión de la no presentación oportuna del reporte técnico para el año 2014, en contra de algunos concesionarios de televisión, no obstante aceptar la derogatoria del numeral 6 del anexo técnico del Acuerdo No. 010 de 2016 por parte de la CRC.

Sobre este particular, debo señalar que la tesis de la Coordinación Legal, consistente en negar la aplicación del principio de favorabilidad en las actuaciones administrativas sancionatorias de la ANTV, **no puede ser de recibo**, como quiera que, a la luz de diversos pronunciamientos del Consejo de Estado, la aplicación del mencionado principio no tiene sombra de duda. Basta ver los pronunciamientos de la Sección Cuarta de esta alta Corporación, en dónde reiteradamente ha reclamado su aplicación respecto de los procesos administrativos a cargo de la DIAN.

Aún más, en una reciente Sentencia de Unificación, la Sección Primera del Consejo de Estado, fue enfático en señalar que el principio de favorabilidad **"debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas"**, con lo cual se despeja la duda acerca de si sólo procede en presencia de norma especial.

En dicha sentencia, la precitada Corporación aseveró:

"Estas mismas consideraciones que hizo la Corte [Sentencia C-922 de 2001] tratándose del régimen sancionatorio aplicable a infracciones cambiarias en las materias de competencia de la DIAN deben también ser aplicadas en los asuntos sancionatorios cambiarios de competencia de la Superintendencia de Sociedades, pues no existe razón alguna que justifique ese trato diferente. Lo contrario, claramente constituiría un agravio al principio constitucional de igualdad ante la ley. En el anterior contexto, en esta providencia la Sección Primera unifica su criterio en el sentido de señalar que **el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas**

(...)

Cuando se impuso la sanción a la demandante la conducta por la cual fue sancionada, esto es, el registro extemporáneo de la operación de inversión extranjera mediante la presentación del Formulario No. 11, **no constituía infracción cambiaria, aunque sí lo era cuando se presentó dicha circunstancia**, esto es, para el mes de octubre de 2008. En el anterior contexto, encuentra la Sala que la Superintendencia de Sociedades desconoció lo dispuesto en el artículo 29 de la C.P. al no aplicar el principio de favorabilidad en la actuación administrativa sancionatoria que adelantó contra la sociedad GRUPO MCM S.A. DE C.V., puesto que para la fecha en que le impuso la sanción de multa demandada el registro extemporáneo de la operación de inversión extranjera que realizó no constituía una infracción cambiaria a la luz de lo reglado en el Decreto 4800 de 2010, norma que modificó el Decreto 2080 de 2000 y que le debió aplicar por serle más favorable."(Negrilla y subraya fuera de texto)

Nótese lo siguiente: el Consejo de Estado no sólo ratifica la aplicación del principio de favorabilidad para "toda clase de actuaciones administrativas", sino que su aplicación la hizo sobre un caso análogo al caso bajo análisis, como quiera que se trataba de un acto

¹ Colombia, M.P.: Guillermo Vargas Ayala Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de Unificación, Nr: 208591105001-23-33-000-2013-00701-01 del cuatro (04) de agosto de 2016.

sancionatorio fundamentado en una norma existente al momento de la ocurrencia del ilícito administrativo, pero inexistente al momento de emitir el acto administrativo.

Bajo esta circunstancia, la ANTV debe proceder a la aplicación automática de la jurisprudencia del Consejo de Estado, tal como lo enseña el artículo 10 del CPACA que prevé:

ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Al resolver los asuntos de su competencia, las Autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, **deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial** del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas".

*Por otra parte, la jurisprudencia antes citada, comporta un precedente que ratifica la doctrina general del acto administrativo que ha sostenido que **la validez de los actos se juzga conforme las normas existentes al momento de su emisión**. Por tanto, el segundo argumento esgrimido por la Coordinación Legal, consistente en la eficacia de la norma derogada y sus efectos retroactivos, tampoco tendría cabida, como quiera que el Consejo de Estado no deja lugar a dudas en cuanto a que, al posible acto administrativo de la ANTV, se le haría el juicio de legalidad de acuerdo con las normas existentes al momento de emitir el acto, no de las normas existentes al momento de iniciar la actuación administrativa.*

Adicionalmente, si la ANTV decidiera emitir actos sancionatorios dentro de los procesos que adelanta por la infracción al numeral 6 del Anexo Técnico del Acuerdo 10 de 2006, podría incurrir en el vicio de expedir actos incongruentes. En efecto, el Consejo de Estado ha sido reiterativo, en el sentido de acusar de ilegalidad a aquellos actos sancionatorios que disten, por sus fuentes fácticas o jurídicas, de aquellas estipuladas en el pliego de cargos. Esa sería la situación en la hipótesis en que nos encontramos, dado que la norma infringida que aparece en el pliego de cargos, no sería la misma por la cual se podría sancionar, ya que, al momento de emitir el acto, la norma y sus presupuestos de tiempo, modo y lugar, habrían desaparecido, y con ello, se incurriría en el vicio de violación del debido proceso.

Al decidir una situación semejante, el Consejo de Estado consideró:

*"Es de anotar que el pliego de cargos es la imputación que hace la Administración al contribuyente cuando este incurre en un supuesto hecho sancionable, como, en este caso, el no enviar la información exigida dentro de los plazos establecidos. Dicho acto debe ser notificado al contribuyente para que pueda ejercer su derecho de defensa. La Sala ha sostenido que las sanciones deben imponerse por los mismos hechos planteados en el pliego de cargos, puesto que si se sanciona por hechos distintos se desconoce el debido proceso"*²

² Colombia, C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta., Radicación Número: 05001-23-33-000-2013-00024-01(20670), Bogotá D.C., Veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Adicionalmente, desde el punto de vista de la técnica del derecho administrativo sancionatorio, un acto sancionatorio, expedido con fundamento en una norma inexistente al momento de su expedición, sería objeto de censura por parte del operador judicial, al no encontrar la fuente legal en la cual se subsumieron los hechos del proceso sancionatorio³ (NFT)

Conclusión.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que, si a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es incuestionable la aplicación del principio de favorabilidad a toda clase de actuaciones administrativas, especialmente cuando la norma que sirvió de fundamento para la apertura de la investigación ha desaparecido del mundo de lo jurídico, evidentemente la ANTV debe aplicar esta regla precedente en los procesos sancionatorios que se encuentra adelantando con ocasión de la infracción a la del numeral 6 del anexo técnico del Acuerdo No. 010 de 2016, el cual fuere derogado por parte de la CRC mediante su Resolución CRC 4735 de 2015.

(...)"

Adicionalmente, es importante expresar que la jurisprudencia de las dos altas cortes, Corte Constitucional y Consejo de Estado, han fijado su posición frente a la materia:

Jurisprudencia de las altas Cortes

Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación del principio de favorabilidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador

Desde sus inicios, la Corte ha analizado si el principio de favorabilidad es aplicable en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Inicialmente analizó el punto haciendo referencia al derecho disciplinario y concluyó que el principio mencionado tenía plena cabida. En efecto, señaló:

"(...)"

³ "Se echa de menos en las decisiones de primera y segunda instancia en la actuación administrativa un verdadero estudio de adecuación típica, (...) En la argumentación que sirve de sustento a los precitados fallos no hay un proceso técnico-jurídico de subsunción típica de los hechos probados bajo las normas invocadas, evidenciándose sí una apreciación y valoración subjetiva de los hechos probados, que se traducen en la suposición de que al hallarse dentro del automotor que este conducía, objetivamente fue él quien los tomó de la bodega con la finalidad de beneficiarse, apreciación que se traduce en un argumento reiterativo según el cual en opinión de la autoridad investigadora no era necesario indagar más al respecto, endilgándosele una responsabilidad objetiva, totalmente proscriba de nuestro ordenamiento jurídico." CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. C. P.: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015), Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00140-00(0477-11), Actor: ORLANDO ANTONIO DURANGO ORTEGA, Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

En el terreno disciplinario, el principio de favorabilidad es también obligatorio, toda vez que la actuación correspondiente culmina con una decisión en torno a la responsabilidad del inculpatado y a la aplicabilidad de una sanción por la conducta imputada. Entonces, si la Autoridad encargada de resolver sobre un proceso disciplinario desconoce la norma favorable, atendiendo tan sólo al tiempo de vigencia de la ley, vulnera el debido proceso⁴.

(...)"

Con posterioridad afirmó:

"(...)

El derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios del derecho penal se aplican, mutatis mutandi, en este campo, pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado. Ahora bien, uno de los principios esenciales en materia sancionatoria es el de la tipicidad, según el cual las faltas disciplinarias no sólo deben estar descritas en norma previa sino que, además, la sanción debe estar predeterminada⁵.

(...)"

Con posterioridad, en la Sentencia C-922 de 2001 de la Corte Constitucional, expresamente señaló que el principio de favorabilidad era aplicable en el ámbito del derecho administrativo sancionador:

"(...)

6. Así pues, la Constitución prohíbe que alguien sea juzgado conforme a normas sustanciales que definan penas, que no sean preexistentes al acto que se imputa. Esta prohibición, aplicable en primer lugar a los juicios penales, resulta extensiva a todos los procedimientos administrativos en los que se pretenda la imposición de una sanción. En efecto, reiterada jurisprudencia constitucional ha señalado que en el derecho administrativo sancionador son aplicables mutatis mutandi las garantías superiores que rigen en materia penal, entre ellas la de legalidad de las infracciones y de las sanciones, conforme a la cual nadie puede ser sancionado administrativamente sino conforme a normas preexistentes que tipifiquen la contravención administrativa y señalen la sanción correspondiente.

Aunque el aparte transcrito se refiere específicamente al derecho disciplinario como parte del derecho administrativo sancionador, las consideraciones recaen sobre este último en general. (se resalta)

⁴ Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 1995

⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-386 de 1996.

(...)"

En esta oportunidad, la Corte señaló que en aquellos casos en los que una norma posterior resulte más favorable al sancionado, la aplicación del principio de favorabilidad implica que tal norma deba ser aplicada de manera retroactiva, so pena de vulnerar la Constitución:

"(...)

*8. No obstante, la Corte advierte que si bien la Constitución de manera general prohíbe la aplicación retroactiva de las disposiciones sancionatorias, establece sin embargo una excepción a dicha prohibición general. **Esta excepción se da en el caso en el cual las normas posteriores son más favorables al sancionado que las anteriores, pues entonces la retroactividad no sólo no es inconstitucional, sino que además tal aplicación retroactiva es ordenada por la Constitución.** Así lo dice claramente el artículo 29 antes transcrito: "... En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable."*

*El principio de legalidad de las sanciones indica de un lado que corresponde al legislador crear, modificar o suprimir los tipos penales y establecer, modificar o suprimir sanciones. De otro significa también que dicho señalamiento debe ser anterior al hecho que se pretende sancionar. **No obstante, este último alcance del principio de legalidad de las sanciones no es absoluto, pues una persona puede resultar sancionada conforme a una ley que no estaba vigente al momento de cometer el delito o la falta, siempre y cuando sea más favorable que la que tenía vigencia en el momento en que se infringió la ley.***

(...)"

Esta posición ha sido reiterada en decisiones posteriores que se citan a continuación. En efecto, en la sentencia T-152 de 2009 se dijo:

"(...)

*18. Como es bien sabido, desde hace muchos años se discute si el fundamento de la potestad sancionadora es el ius punendi del Estado o la potestad ejecutiva de la administración, pues aquella surge de la relación de sujeción especial del servidor público y busca mantener la disciplina interna de la organización estatal. **No obstante, en desarrollo de las normas constitucionales que plasman las garantías del debido proceso tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas, se ha concluido que en el derecho administrativo sancionador debe otorgarse el mayor número de garantías posible acorde con la naturaleza de dicha actuación.** Esto explica entonces, que muchos de los Tribunales Constitucionales hubieren concluido que los principios que inspiran el derecho penal se aplican, en algunas ocasiones, con matices y, en otras de manera íntegra, al derecho sancionador. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español⁶ ha concluido que los principios*

⁶ Consultamos al respecto las sentencias 137 del 21 de julio de 1997, 151 del 29 de septiembre de 1997 y 113 del 29 de septiembre de 2008. En este sentido, es bastante completo el estudio realizado por García de Enterría, Eduardo y

propios del derecho penal como la tipicidad se "relajarían o debilitarían" en el derecho administrativo sancionador, pero otros como el principio del non bis in idem se aplicarían plenamente.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁷, en sentencia del 21 de febrero de 1984, caso Ozturk, dijo que una muestra clara de que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal surgen del ius punendi del Estado, es la aplicación de las corrientes actuales de despenalización de ciertas conductas para convertirlas en infracciones de índole administrativa, de ahí que, para efectos de las garantías aplicables, no deben existir diferencias sustanciales entre las infracciones penales y las administrativas.

A su turno, esta Corporación ha sostenido que si bien es cierto "en el derecho administrativo sancionador son aplicables mutatis mutandí las garantías superiores que rigen en materia penal"⁸, también lo es que, por su especial naturaleza y objetivos propios, la sanción disciplinaria no está sometida al mismo grado de rigurosidad en la aplicación de garantías que la que se exige cuando se impone la sanción penal. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional dijo que "el principio de legalidad opera con menor rigor en el campo del derecho administrativo sancionador que en materia penal, aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, no se puede demandar en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal."⁹

Como puede advertirse, entonces, la aplicación de las garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución para el proceso penal será igualmente aplicables al derecho administrativo sancionador, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la sanción administrativa y correccional.

(...)"

Tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en el derecho administrativo sancionador, la Corte Constitucional ha señalado que la consecuencia es el decaimiento del acto administrativo o su revocatoria. En efecto, en la Sentencia T-1087 de 2005 se señaló:

"(...)

Establecido entonces que el principio de favorabilidad opera en el derecho administrativo sancionador, hasta dar lugar i) al decaimiento del acto, así la sanción estuviere ejecutoriada y la

Fernández Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. Decimotercera edición. Editorial Thomson Civitas. Madrid. 2006. Páginas 171 y siguientes.

⁷ Esta referencia se obtuvo de Parada Vásquez, José Ramón. Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo IV. Editorial Civitas. Madrid. 1995. Página 6059.

⁸ Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En este mismo sentido, pueden verse las sentencias C-955 de 2001, C-507 de 2006, C-211 de 2000, C-564 de 2000, C-1161 de 2000 y C-386 de 1996, entre otras.

⁹ Corte Constitucional, Sentencia C-860 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.

jurisdicción contenciosa se hubiere pronunciado sobre su legalidad y ii) a su revocatoria, debe la Sala establecer si lo mismo puede decirse de las sanciones impuestas a los miembros de las Fuerzas Militares, que pierden ejecutoria en razón de la declaratoria de inexecutable de la norma que las sustentó.

(...)"

Así mismo, en criterio de la Corte Constitucional el principio de favorabilidad es aplicable en materia de derecho administrativo sancionador y tratándose de la derogatoria de una norma que conlleva una sanción, la consecuencia es el decaimiento del acto administrativo por la desaparición de los fundamentos de derecho que lo sustentaba.

Ahora bien, resulta también importante cuál ha sido la posición del Consejo de Estado en cuanto a la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad en materia de derecho administrativo sancionador.

Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación del principio de favorabilidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador

El Consejo de Estado, de manera general, ha sido reacio a aceptar la aplicación del principio de favorabilidad en materia de derecho administrativo sancionador.

"(...)

No se comparte la tesis de que el principio de favorabilidad se debe aplicar cuando quiera que se impongan sanciones administrativas, pues en esta materia y específicamente en relación con el derecho económico, que exige el que sus normas tengan efecto general inmediato, sin que haya lugar a pretender las consecuencias que se predicán a este respecto de las normas penales. No se desconoce que en algunos aspectos administrativos se aplica el principio de favorabilidad pero ello acontece en virtud de la existencia de leyes que específicamente lo consagran para tales áreas, como sucede por ejemplo en el campo tributario.¹⁰

(...)"

No obstante, tal posición ha sido modificada en otras oportunidades en las que se ha pronunciado a favor de tal aplicación:

"(...)

En el caso sub examine, si bien es cierto que los hechos ocurrieron el 1º de diciembre de 1.992, es decir cuando aún estaba vigente el decreto 1105 del mismo año (que contempla una multa equivalente al 200 % del valor de la mercancía), también lo es que antes de haber sido proferidas las resoluciones acusadas entró en vigencia el decreto 1090 de 1.992, el cual contempla una sanción más favorable que la contenida en el primero de los citados (50% del

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de noviembre 12 de 1992. MP. Dra. Consuelo Sarria O.

valor de la mercancía). En consecuencia al haber sido expedidas las resoluciones acusadas bajo la vigencia del decreto 1090 de 1.992, la Sala considera que la multa a imponer a la sociedad actora debió corresponder al 50% del valor de la mercancía determinado en el aforo realizado por la administración, y por ello declarará nulos los actos demandados, pero sólo en cuanto impusieron a la demandante la sanción 200% del valor de la mercancía¹¹.

(...)

Precisa la Sala, que el precepto que en virtud del principio de la favorabilidad se aplica para declarar la procedencia del derecho fundamental que invoca el actor - artículo 15 de la C.P. - rige plenamente, sin que la declaratoria de inexecutable del artículo 76 de la ley 510 de 1.999, que a su turno estableció de manera similar la extinción de las sanciones consignadas en bancos de Datos la afecten, porque solamente un análisis de exequibilidad de la norma en que se fundamenta esta decisión - el que hasta el momento no se ha producido - podría hacerla inoperante. En las condiciones anotadas se concederá el amparo deprecado por el accionante, ordenándose a DATACRÉDITO que de manera inmediata a la comunicación de esta sentencia, borren de sus centrales de datos de información negativa que repose en contra del actor, derivada de la cancelación de la cuenta corriente suscrita con BANCAFÉ¹².

(...)"

Teniendo en cuenta estas posiciones, en el año 2002, la sala de Consulta y Servicio Civil señaló que el principio de favorabilidad era aplicable en materia de derecho administrativo sancionador, siempre que la especie de la que se tratara no resultara incompatible con tal principio. Así se afirmó:

"(...)

1. El principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, debe aplicarse, como regla general, en los procesos disciplinarios y administrativos adelantados por las Autoridades administrativas, salvo en aquellas materias que por su especial naturaleza no resulten compatibles con él, como es el caso, por ejemplo, de las disposiciones en que se decide sobre sanciones a imponerse por violación de las disposiciones sobre política económica.

2. El principio de favorabilidad cuando es aplicable en materia sancionatoria administrativa, constituye un imperativo constitucional y, por ende, bien puede ser aplicado a solicitud de parte, o de oficio por la Autoridad juzgadora competente.

3. No es necesario realizar ningún procedimiento excepcional, adicional o rehacer el proceso adelantado, dentro de los procesos que por conductas realizadas durante la vigencia de los decretos 1554 y 1557 de 1.998, se hubieren iniciado con invocación de las disposiciones de tales decretos, y que en la actualidad se encuentren pendientes de decisión o para resolver

¹¹ Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia marzo 23/97 Sección I M.P. Dr. Libardo Rodríguez.

¹² Consejo de Estado, Sentencia agosto 17 de 2000 AC-11.628. Sección II M.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado

algún recurso. Basta en ellos, citar la existencia de nuevas disposiciones sancionatorias que resultan más favorables a los inculpados y darles aplicación en la decisión administrativa correspondiente¹³.

4 y 6. Del mismo modo debe actuarse cuando se juzgue la conducta de un eventual infractor de las normas sobre transporte por hechos ocurridos durante la vigencia de los decretos 1554 y 1557, aunque se haya dictado auto de apertura durante la vigencia del decreto 176/2001, o cuando se juzgue una falta cometida después de la vigencia del decreto 176/2001 pero por error se hubieren invocado las normas de los decretos 1554 y 1557 de 1.998, a condición de que la conducta por la cual se juzga esté adecuadamente descrita.

5. El principio de favorabilidad en los procesos administrativos sancionatorios en los cuales es aplicable, al igual que en materia penal estrictamente, conlleva la disminución de la pena o sanción para quienes habiendo sido juzgados bajo la vigencia de las normas anteriores (cosa decidida administrativa) no hayan cumplido la correspondiente sanción cuando ocurra el cambio de legislación y ésta les sea más favorable. Por ende, deberá dictarse una nueva providencia en la cual se ajuste la sanción a las normas más favorables de la nueva normatividad.

(...)”.

Con posterioridad, en el año 2009, la Sección Cuarta de la Corporación manifestó que a pesar de que su jurisprudencia había sido constante en negar la aplicación del principio de favorabilidad, el mismo debía ser acogido como una mínima garantía del debido proceso. En efecto, afirmó:

“(...)”

Ahora bien, la Sección Cuarta ha sido constante en negar la aplicación del principio de favorabilidad en materia de sanciones administrativas, con el argumento de que el mismo sólo tiene cabida en el derecho penal, según lo prevé el artículo 29 [3] de la Constitución Política y no respecto de sanciones administrativas, cuyos procedimientos, objetivos e intereses tutelados son distintos a los de aquél. Además, ha sostenido que la disposición con base en la cual se impone la sanción administrativa es la vigente en la época de ocurrencia de los hechos y que la norma que consagra una conducta irregular y cuantifica una sanción, que es sustancial, rige hacia el futuro, es decir, para conductas que ocurran después de la vigencia de la ley.

No obstante, en este caso debe aceptarse la aplicación del principio de favorabilidad, como expresión de una mínima garantía del debido proceso a que tiene derecho cualquier persona y que por mandato constitucional se aplica a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales (artículo 29 [1] de la Constitución Política).

En sentencia C-922 de 2001 la Corte Constitucional precisó que las contravenciones administrativas cometidas en vigencia de la normatividad antigua, pueden ser sancionadas conforme a normas posteriores, siempre y cuando sean más favorables.

¹³ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 16 de octubre de 2002, Radicado No. 1454.

Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, anular los actos acusados, por violación del principio de favorabilidad, como expresión del debido proceso. A título de restablecimiento del derecho, se ordenará la devolución de la multa por \$69.511.122, suma cancelada por el actor a favor del Tesoro Nacional (folio 91), junto con los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia, pues con base en el fallo de la Corte Constitucional C-188 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández, que declaró inexecutable algunos apartes del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, no hay lugar al pago de intereses comerciales "a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago" y sin perjuicio, dice también la Corte en la citada decisión, "de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria"¹⁴.

(...)"

Así las cosas, es posible afirmar que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, en la actualidad aceptan la aplicación del principio de favorabilidad en el ámbito del derecho sancionador. Esta posición es también aceptada por la doctrina que al respecto ha indicado:

"(...)

Si con posterioridad a la comisión de un ilícito, previsto en la ley, surge otra norma que establece una sanción menor para el mismo hecho, se aplicará la última y no aquella que estaba vigente al momento en que se cometió la infracción. Quiere decir esto que la nueva disposición surte efectos retroactivos para la sanción, o sea que se aplica para un caso que aconteció antes de entrar a regir la norma.

Lo que no sucede cuando la ley es desfavorable, pues continuará aplicándose la vieja perceptiva en forma ultra activa. De tal suerte que la ultra actividad abarca aun los casos juzgados definitivamente y los no juzgados, eventos en los cuales se dicta la sentencia de acuerdo a las directrices del nuevo ordenamiento que es más favorable¹⁵.

(...)"

En atención a los criterios jurisprudenciales citados y de conformidad con el Concepto Jurídico emitido por el asesor externo de la Autoridad Nacional de Televisión, es importante expresar las siguientes consideraciones:

Por un lado, si bien es cierto que el concepto emitido por el abogado externo de la ANTV hace referencia exclusivamente al numeral 6 del anexo técnico del Acuerdo No. 010 de 2016, el cual fuere derogado por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, mediante su Resolución No. 4735 de 2015, también es cierto que la situación jurídica que se presenta en la

¹⁴ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 3 de diciembre de 2009, Expediente No. 25000-23-27-000-2001-01180-01(15392)

¹⁵ Ossa Arbeláez, Jaime, "Derecho administrativo sancionador. Una aproximación dogmática", Editorial Legis, (Bogotá – 2009), Pág. 302

actuación administrativa que se decide en la presente resolución presenta las mismas situaciones fácticas, toda vez que de igual forma que sucedió en el caso analizado por el asesor externo, en este caso una resolución expedida por la Autoridad Nacional de televisión, la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006, acuerdo que contenía las disposiciones por cuya presunta infracción se formuló el segundo cargo del numeral quinto contenido en la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016.

En ese mismo sentido, merece la pena expresar que la situación de fondo analizada en el concepto emitido por el abogado externo de la ANTV, trató de determinar si en los procedimientos administrativos sancionatorios podía aplicarse el principio de favorabilidad especialmente en los casos en los que la norma que sirvió de fundamento para la formulación de cargos a desaparecido del mundo jurídico, llegando a la conclusión que a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es incuestionable la aplicación del principio de favorabilidad en toda clase de actuaciones administrativas.

Descrito lo anterior y teniendo en cuenta que la regulación establecida en la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, la cual derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006 por cuyo incumplimiento se formuló a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, el cargo segundo en la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, se ha establecido por esta Autoridad más favorable, en esa medida este cargo no será tenido en cuenta por esta Autoridad.

En ese orden y teniendo en cuenta que el Acuerdo que contenía las disposiciones por cuya presunta infracción se formuló el segundo cargo contenido en la Resolución No. 2428 del treinta (30) de diciembre de 2016, ha desaparecido del mundo jurídico, esta Autoridad en aplicación del principio de favorabilidad se abstendrá de analizar la conducta descrita en este cargo formulado.

8. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

En lo que concierne a la determinación de la sanción, el régimen jurídico del servicio público de televisión consagra como sanciones a aplicar a los concesionarios y operadores del servicio público de televisión en caso de violación de las disposiciones legales y reglamentarias, las consistentes en multa, suspensión del servicio y caducidad de la concesión.

En efecto, el artículo 12 literal h) de la Ley 182 de 1995, establece que son funciones de la Junta Nacional de Televisión, entre otras:

"(...)

Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias o de las de la Comisión, relacionadas con el servicio.

Para tales efectos, y en relación con las concesiones originadas en un contrato, la Junta Directiva de la Comisión decretará las multas pertinentes por las violaciones mencionadas, en aquellos casos en que considere fundadamente que las mismas no merecen la declaratoria de caducidad del contrato. Ambas facultades se considerarán pactadas así no estén expresamente consignadas en el convenio.

Las multas serán proporcionales al incumplimiento del concesionario y al valor actualizado del contrato, y se impondrán mediante resolución motivada.

Igualmente, la Junta Directiva podrá imponer la sanción de suspensión de la concesión hasta por seis (6) meses o la cancelación definitiva cuando la transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias de la Comisión así lo acrediten.

En el caso de las comunidades organizadas, además de dicha suspensión, la Junta Directiva podrá imponer las sanciones de multa hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la de revocatoria de la licencia para operar el servicio.

En el caso de los operadores públicos las sanciones podrán ser multas de hasta mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la destitución de los servidores públicos que hayan tolerado o cometido la infracción.

Para el ejercicio de tal facultad la Junta Directiva deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión;

(...)”

En virtud de lo antes expuesto, la Junta Nacional de Televisión de la ANTV, en ejercicio de las facultades de Inspección, Vigilancia, Control y Seguimiento señaladas en el acápite de la competencia de este acto, tomará en cuenta los criterios señalados en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 antes transcrito, esto es, *"La gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia"*, para efectos de establecer la sanción que debe aplicar en el presente caso, en la medida que encontró que las conductas desplegadas por el concesionario **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, constituyen un incumplimiento frente a las disposiciones normativas establecidas de acuerdo a lo argumentado en la presente Resolución.

Así mismo, la ANTV en aras de brindar un escenario procesal absolutamente garantista, en la determinación de la sanción a imponer a la sociedad investigada, además de los criterios contemplados en el artículo 12, literal h) ya citado de la Ley 182 de 1995, dará aplicación al principio de proporcionalidad y razonabilidad que orienta las actuaciones administrativas sancionatorias, logrando el equilibrio entre la finalidad de las disposiciones que establecen la sanción y la sanción como tal, y la proporcionalidad entre la conducta generadora de la infracción y la sanción impuesta.

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-125 de 2003, señala lo siguiente:

"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, este exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad. (...)"

Después de las anteriores precisiones, se tratarán en su orden los criterios señalados en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995.

Gravedad de la Falta:

FRENTE AL PRIMER CARGO: La Autoridad Nacional de Televisión encuentra que el concesionario **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, conforme lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo 010 de 2006 en concordancia con el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, estaba obligado a atender los requerimientos de información que le formulara la CNTV en ejercicio de su función de Inspección, Vigilancia y Control atribución que esta Entidad estaba cumpliendo precisamente al realizar la visita administrativa el veintiuno (21) de abril de 2015, sin embargo, la sociedad en mención no atendió la totalidad de los requerimientos de información y documentación que le fueron formulados en el marco de la visita realizada, con lo cual se vio obstaculizado el ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control de la Autoridad Nacional de Televisión, pues dicha omisión impide obtener una información veraz y oportuna del cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias adquiridas por el concesionario.

De esta manera, el no atender la totalidad de los requerimientos de información que le fueron formulados en el marco de la visita señalada, se considera una conducta grave, porque impactó de forma directa la función de Inspección, vigilancia y control que se encuentra en cabeza de la ANTV, lo cual trae consigo el incumplimiento de la reglamentación expedida para la prestación del servicio público de televisión abierta, en la medida que infringió sin justificación atendible disposiciones de orden legal, reglamentario de alta trascendencia.

La omisión de entregar la información o documentación requerida, se considera una conducta grave, porque afectó el ejercicio eficiente de la función de inspección, vigilancia y control que se encuentra en cabeza de la ANTV.

Expresado lo anterior, es importante señalar la importancia de dar estricto cumplimiento a los requerimientos de información realizados por la entidad, en consideración a que la función de vigilancia, seguimiento y control está íntimamente ligada a la intervención del Estado en los servicios públicos, potestad que es de origen constitucional, y que encuentra su arraigo en el artículo 334 de la Constitución Política, el cual establece que le corresponde al Estado, por mandato de la Ley, intervenir en los servicios públicos y privados, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

Así mismo, el artículo 365 de la Constitución Política, señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, al cual corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y ejercer las actividades de regulación, control y vigilancia.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, expone claramente que el intervencionismo estatal en los servicios públicos, se justifica en el interés público, que le sirve de causa y finalidad. Con su prestación eficiente se corrigen inequidades en la distribución de la riqueza y del ingreso; se garantiza el buen desempeño de la economía. Así mismo, dentro de la doctrina que inspira al Estado Social de Derecho se encuentra el intervencionismo estatal que tiene como base el respeto y la garantía de la propiedad privada, la libertad de empresa y la libre iniciativa particular. El Estado solamente interviene con autoridad pública lo privado, lo que no le es propio. La Constitución Política permite la intervención del Estado en toda clase de empresas, para los fines y dentro de los límites que la Carta Política establece explícitamente la intervención, por mandato de ley, *"en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y **en los servicios públicos y privados**"*. (Artículos 333 y 334 de la Constitución Política).^[17] Por su parte, el artículo 1 de la Ley 182 de 1995 establece que **La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado.**

Ahora bien, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1507 de 2012, *"El objeto de la ANTV es brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin de velar por el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio, así como evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley. La ANTV será el principal interlocutor con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes y dirigirá su actividad dentro del marco jurídico, democrático y participativo que garantiza el orden político, económico y social de la Nación."*

De conformidad con la distribución de funciones efectuadas por la Ley 1507 de 2012, le corresponde a la ANTV, entre otras, adjudicar las concesiones y licencias de servicio, espacios de televisión, **ejercer el control y vigilancia del servicio**; fijar las tarifas, tasas, precios públicos y derechos ocasionados por la prestación del servicio de televisión; asistir al Gobierno Nacional en el estudio y preparación de las materias relativas a los servicios de televisión, funciones que requieren para su ejercicio contar con la información necesaria por parte de los operadores del sector.

Ahora bien, en el marco del ejercicio de las funciones que les fueron atribuidas en la Ley 1507 de 2012, las cuales apuntan al cumplimiento de los postulados del artículo 365 de la Constitución Política, es decir asegurar la prestación eficiente del servicio de televisión a todos los habitantes del territorio nacional y ejercer las actividades de regulación, control y vigilancia, la ANTV, debe tener acceso a la información de los diferentes operadores del servicio de Televisión.

En concordancia con lo anterior, el artículo 5 literal b) de la Ley 182 de 1995, desarrolla la facultad de inspección y vigilancia que se encuentra implícita en tales atribuciones constitucionales, en los siguientes términos:

"(...)

ARTÍCULO 5. FUNCIONES. En desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de televisión: (...) b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva por inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar.

(...)".

Estas actividades son propias de la función interventora del Estado, tienen respaldo constitucional, y configuran una de las excepciones a la reserva de los documentos privados establecida en el último inciso del artículo 15 de la Constitución Política, que dispone "(...) para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley. (...)".^[18]₁₆

Lo anterior, analizado a la luz de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, expresa claramente en la sentencia C- 298 de 5 de mayo de 1999, Magistrado Ponente (E), Dra. Martha Victoria Sánchez Méndez, que declaro Exequible el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, la trascendencia de la función de vigilancia y control:

"(...)

Intervención por parte de la Comisión Nacional de televisión

[...] esa intervención tiene dos aspectos funcionales generales señalados por el ordenamiento superior, a saber: la dirección de la política en materia de televisión y la regulación de la prestación de ese servicio, funciones que en los términos de la ley, se complementan para concentrar en dicho organismo la regulación, manejo y control de tan influyente servicio de comunicación.

(...)

Es obvio que la actividad de intervención implica de suyo, labores de inspección, vigilancia, seguimiento y control como las que están previstas en el literal acusado, pues no se entiende como el Estado puede intervenir sin actuar de manera directa en la vigilancia de la prestación del servicio de televisión. Para tales efectos, la ley la autoriza a la Comisión a iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de

^[18] Concepto CNTV 132 (IE-3163) de 19 de abril de 2006

espacios de televisión y contratistas de televisión y si fuere del caso, exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, e imponer las sanciones a que haya lugar.

Este tipo de actuaciones propias de la función interventora del Estado, tienen además respaldo constitucional, en la medida que configuran una de las excepciones a la reserva de los documentos privados previstas en el último inciso del artículo 15 de la Carta Política, el cual preceptúa que "... para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

(...)".

Lo expresado por la Corte Constitucional nos permite concluir que la ANTV tiene amplias facultades en materia de vigilancia, seguimiento y control y, la competencia en esta materia tiene profundas razones, incluso ligadas a los fines constitucionales establecidos para el estado social de derecho, el bienestar general a través de una adecuada prestación del servicio público de televisión.

En línea con lo antes señalado y dada la conducta desplegada por la sociedad GLOBALNET COLOMBIA S.A., señala esta Autoridad que la sanción a imponer al concesionario investigado, se fundamenta en la gravedad de la falta cometida, la cual se encuentra debidamente probada y soportada en el procedimiento administrativo adelantado.

En ese sentido, lo que respecta a la obligación legal de la sociedad investigada de atender los requerimientos de información y documentación en curso de visitas de inspección, prevista en el literal b) de la Ley 182 de 1995 y en el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; se demostró a lo largo de la actuación el incumplimiento de la obligación en comento, prueba de ello es lo afirmado en el ata de visita No. 15042 del veintiuno (21) de abril de 2015, así como la aceptación expresa por parte de la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, de no haber entregado la documentación solicitada, sin perjuicio de las explicaciones rendidas por el operador, que no fueron de recibo por esta Autoridad.

Daño Producido:

La inobservancia de las disposiciones citadas en el acápite de normas infringidas denota la incuestionable gravedad de las faltas cometidas por parte del operador investigado, lo que sin lugar a duda razonable constituye una antijuridicidad en las conductas desplegadas por la comunidad organizada de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, por lo que el daño producido con los incumplimientos del operador, a criterio de esta Autoridad es consustancial a la antijuridicidad de las conductas tipificadas, es decir, que se encuentra implícita en el mismo verbo rector de las obligaciones y prohibiciones, por las cuales se dio inicio al presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio y se le formuló cargos al operador investigado.

De lo expresado antes se deduce que no se requiere que la Autoridad Administrativa, en este caso la Autoridad Nacional de Televisión ANTV demuestre que la omisión en que incurrió el investigado haya causado un daño a los intereses de la propia administración o de terceros, o defina si el actuar del operador investigado es doloso o culposo, toda vez que las disposiciones legales y reglamentarias que inspiran la prestación del servicio de televisión son de carácter administrativo, y tratándose de un servicio público gozan de un grado superior, por la importancia y protección especial de que gozan por parte del Estado y del ordenamiento, que ha desplegado su potestad de intervención en la prestación de este servicio por su naturaleza.

En ese orden, es importante mencionar que la prestación del servicio de televisión debe estar orientada al cumplimiento de los fines y principios establecidos por el legislador en el artículo 2 de la Ley 182 de 1995, y por supuesto al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el servicio público de televisión, es decir, que en el caso puntual el daño recae en el bien jurídico tutelado que es la debida prestación del servicio público de televisión que se ha visto afectado, sin que se evidencie que el operador haya actuado con la prudencia, diligencia y el cuidado requerido, porque el operador incumplió varias de las obligaciones y prohibiciones que tiene a su cargo, lo que ha configurado un número considerable de faltas, sin que haya demostrado un eximente de responsabilidad frente a las conductas endilgadas.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero HUGO FERNANDO BASTIDAS, el 29 de mayo de 2014, dentro del expediente con radicación No. 25000-23-27-000-2009-00231-01 (18761). "(...) *No se requiere que la autoridad tributaria demuestre que la omisión o la acción del obligado, según el caso, haya causado efectivamente un daño a los intereses de la propia administración o de terceros, puesto que el tipo de faltas administrativas previstas en los artículos 651 y 675 de E.T. presuponen el riesgo real o potencial de que la omisión o la comisión del error cause un daño, en general, a los intereses públicos. (...)*

Le corresponde al sujeto pasivo de la obligación demostrar una eximente de imputabilidad de la falta, como la fuerza mayor o caso fortuito tal como lo precisa la Corte Constitucional¹⁴ en sentencia C-690 de 1996. (...)

14 "Finalmente, en general es razonable suponer que ha actuado de manera dolosa o negligente quien ha incumplido un deber tributario tan claro como es la presentación de la declaración tributaria en debida forma, por lo cual resulta natural considerar que la prueba del hecho del hecho- esto de la no presentación de la declaración- es un indicio muy grave de la culpabilidad de la persona. Por consiguiente, teniendo en cuenta que las sanciones impuestas en caso de no presentación de la declaración tributaria son de orden monetario, que el cumplimiento de este deber es esencial para que el Estado pueda cumplir sus fines, y conforme al principio de eficiencia, la Corte considera que una vez probado por la administración que la persona fácticamente no ha presentado su declaración fiscal, entonces es admisible que la ley presuma que la actuación ha sido culpable, esto es, dolosa o negligente.

(...)"

Reincidencia:

En relación con las conductas investigadas y las normas que se consideran vulneradas con el actuar de la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, encuentra la ANTV que ante esta Autoridad no existe por parte de la sociedad investigada reincidencia en las conductas sancionables, situación que será apreciada por la ANTV al momento de dosificar la sanción imponible.

Proporcionalidad entre la falta y la sanción:

Conforme lo previsto en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, se dará aplicación al principio de proporcionalidad que orienta las actuaciones administrativas sancionatorias. Sobre la particular señala la Corte Constitucional en Sentencia C-125 de 2003, lo siguiente:

"(...)

En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, este exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad.

(...)"

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la finalidad de las normas de orden sancionatorio, las cuales buscan que los concesionarios de los servicios de televisión no incurran en infracciones al régimen que regula el servicio público de televisión, considera la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, previo un juicio de proporcionalidad y razonabilidad entre las infracciones cometidas y las sanciones procedentes de que trata el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, que la sanción a imponer a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, es la consistente en multa, cuyo monto será definido de acuerdo con el valor actualizado del contrato a la presente fecha.

En atención a lo expresado y teniendo en cuenta que la Coordinación Administrativa y Financiera de la ANTV, informó a la Coordinación de Vigilancia, Control y Seguimiento a través del Memorando Interno No. I2018900000580 del veinte (20) de febrero de 2018 que el valor actualizado al 31 de enero de 2018 del Contrato de Concesión celebrado con el operador **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, equivale a la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 833.379.939 M/CTE).**

La Junta Nacional de Televisión de la ANTV, ha decidido imponer a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, una sanción correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE(\$ 4.166.900).**

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Resolución ANTV 1175 de 2013, las decisiones que se tomen por parte de la Junta Nacional de Televisión se darán en la forma de resoluciones, las cuales serán expedidas por la Dirección.

En mérito de lo expuesto, y conforme a lo aprobado por la Junta Nacional de Televisión según consta en el Acta No. 292 del quince (15) de marzo de 2018.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR responsable a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el número de NIT. 830.108.200 - 3, por la violación de lo dispuesto en el literal b) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995 y el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER sanción a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 - 3, consistente en multa correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE(\$ 4.166.900)**, conforme lo establecido en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme la presente resolución, la sanción impuesta deberá ser consignada en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder al pago la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, deberá consignar en la cuenta de ahorros Convenio número 44704 de BANCOLOMBIA, colocando como referencia el número de NIT de la sociedad sancionada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la Coordinación Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Televisión el contenido de este acto administrativo, para efectos del cobro efectivo del valor de la sanción de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 4.166.900)**, impuesta por la entidad a la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200 - 3, una vez se encuentre ejecutoriada.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal de la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200-3, o a quien haga sus veces en los correos electrónicos: vanessa.carreno@villasyondono.com, diana.mendez@villasyondono.com de acuerdo a la información que reposa en el expediente A - 1465, haciendo entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición que podrá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo. Si no se pudiese efectuar la notificación personal ésta se surtirá por aviso.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la presente resolución, los valores de la sanción impuesta y el valor de la diferencia deberán ser consignados en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder con el pago, la sociedad **GLOBALNET COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT. 830.108.200-3, deberá consignar en la cuenta de ahorros Convenio número 44704 de

BANCOLOMBIA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez en firme la presente resolución, informar a la Coordinación Administrativa y Financiera, sobre la decisión adoptada en la presente resolución, para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de su fecha de ejecutoria.

Dada en Bogotá, D.C., a los

10 ABR 2018


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ANGELA MARIA MORA SOTO

Directora

Revisó: Carolina Figueredo Carrillo,
Monica Bolaños

Revisó: Isaac Abadía 
María Carolina Olano

Proyectó: A. Esquivel.